

las garantías á que se refieren los artículos 16 y 27 de la Constitución general, y

Considerando: que segun aparecen las constancias de autos, no se han vulnerado en las personas de los interesados en la testamentaria, á cuyo nombre implora el quejoso, el goce de garantías á que se refiere; de conformidad con lo que se proviene en el art. 101 de la Constitución General y por los propios fundamentos en que se apoya el fallo pronunciado por el Juzgado de Distrito de Aguascalientes, se decreta: que se confirma la sentencia pronunciada respecto de este juicio por dicho Juzgado, á 13 de Agosto último, que declara: que la Justicia de la Union no ampara ni protege al C. Jesus Gomez Velez, albacea dativo de la testamentaria de Doña Perfiria Dávalos, contra los procedimientos de embargo y remate que trata de verificar el ciudadano jefe de hacienda del Estado, en la casa núm. 9 de la calle de San Diego de esa ciudad, para pago de ciento setenta y nueve pesos veinticinco centavos que se adeudan á la hacienda pública federal, por el denunciante D. Guadalupe Velez, á quien se habia adjudicado el crédito de cuatrocientos pesos y sus réditos, pertenecientes á una capellanía de sangre que reconoce sobre sus bienes la testamentaria de aquella señora.

Devuélvanselas actuaciones al Juzgado de su origen, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes, archivándose á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los ciudadanos Presidente y Magistrados que formaron el tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*M. Auza.*—*Juan J. de la Garza.*—*José M. Lozano.*—*José S. Arteaga.*—*Ignacio Ramirez.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*M. de Oastañeda y Nájera.*—*Luis Velasquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Octubre
TOMO VII.—PARTE II.

28 de 1874.—*Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito del Estado de México por el C. Lic. Antonio Inclan, en representacion de varios vecinos de San Lorenzo Tepaltitlan, contra el procedimiento y sentencia del C. J. M. Bermeo, Juez 2º conciliador de la capital de ese Estado, por violacion de garantías.

PEDIMENTO FISCAL.

Ciudadano Juez de Distrito.

El promotor fiscal dice: que el C. Lic. Antonio Inclan por ocurso de fecha 5 del mes próximo pasado y en representacion de doscientas ochenta y seis personas, vecinos del pueblo de San Lorenzo Tepaltitlan de esta municipalidad, cuyos nombres constan en el poder jurídico que acompaño, interpone el recurso de amparo por violacion de las garantías consignadas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, sobre el procedimiento y sentencia pronunciada por el C. José María Bermeo, juez 2º conciliador de esta Capital, en el juicio promovido por el comun del pueblo de San Mateo Oztacatipan, sobre restitucion de un egido, en cuyo juicio falló: que los vecinos de San Lorenzo restituyan al pueblo de San Mateo, los terrenos que poseen á título de adjudicacion.

El acto reclamado puede reducirse á estos términos: que los peticionarios no han sido oídos en el juicio, y sin su audiencia han sido sentenciados por un juez incompetente.

En los autos del recurso de amparo, existen constancias que justifican los conceptos siguientes:

1º. Que en el año de 1868, la Jefatura Política de este Distrito en ejercicio de las atribuciones que concede á estas autoridades la ley de 25 de Junio de 1856 y circulares relativas; y de acuerdo con los principales vecinos de los citados pueblos de San Lorenzo y San Mateo, se acordó se practicara la division de un llano que existia entre ambos pueblos, el que disfrutaban en común y sobre el que tenían algunas diferencias.

2º. Que en efecto se practicó la division y una sanja fué el límite divisorio del llano, y la parte que correspondió á San Lorenzo, la misma autoridad la mandó fraccionar en lotes y la adjudicó á los vecinos del propio pueblo, expidiéndoles el correspondiente título de adjudicacion.

3º. Que el C. Lic. Hilario García como apoderado del citado pueblo de San Mateo, con fecha 13 de Mayo último se presentó por escrito al ciudadano juez de 1ª instancia del ramo civil, demandando al pueblo de San Lorenzo sobre restitucion de los terrenos que poseía, y los que la autoridad política les habia adjudicado el año de 1868.

4º. Que el referido C. Juez, por auto de 14 del mismo mes de Mayo, proveído en el escrito de demanda, se escusó de conocer en el negocio y pasó su conocimiento al C. Andrés Estevez, juez 1º conciliador.

5º. Que esta autoridad á esa fecha sustitua el juzgado del ramo criminal, y por esta circunstancia se abocó el negocio al juez 2º conciliador, C. José María Bermeo.

6º. Que este funcionario emplazó al juez auxiliar de San Lorenzo, para que el pueblo contestara la demanda, dándole el carácter de comunidad, y mandando, que en caso de que no tuviesen apoderado, se entendiese el traslado con uno de los síndicos del IL Ayuntamiento de esta Capital.

7º. Que el pueblo demandado solicitó de la autoridad política la licencia respectiva para nombrar su personero; pero el juez no

concediéndole ningun término, por auto de 1º de Junio ordenó que el traslado se entendiese con el C. síndico, Lic. Martínez de Castro, verificándose así.

8º. Que tanto el auxiliar de San Lorenzo como el C. Lic. Manuel Reyes, persona nombrada para recibir el poder del expresado pueblo, se opusieron para que el síndico lo representara en el juicio, siendo inútiles sus gestiones, pues el juez lo siguió hasta pronunciar sentencia definitiva, con solo la representacion del síndico.

9º. Que varios individuos de los que hoy son representados por el C. Lic. Inclan, protestaron contra el procedimiento; y después de concluido el juicio y en tiempo oportuno, el C. Lic. Diaz Gonzalez, con el mismo poder que hoy tiene el C. Lic. Inclan, apeló de la sentencia, y el juez de los autos negó la entrada al recurso, sin embargo de todo lo cual se señaló el día seis del próximo pasado Agosto para practicar la diligencia de posesion que debia darse al pueblo de San Mateo de los terrenos en cuestion.

10. Que esa diligencia de posesion se mandó suspender por orden del juzgado del digno cargo de vd.

11. Que el C. Andrés Estevez, juez 1º conciliador, con fecha veintinueve de Mayo volvió á encargarse del despacho de su juzgado.

12. Que en los autos del juicio de que se viene hablando, no hay constancia que acredite que el ciudadano juez 2º conciliador hubiese pasado el conocimiento del negocio al juez 1º, después que cesó el impedimento que tuvo para conocer de él cuando se inició el pleito.

13. Que la sentencia del C. Juez Bermeo, se funda en un decreto del Estado de fecha 12 de Abril de este año, y en el art. 8º de la ley de 25 de Junio de 1856.

14. Que siendo un juez lego el 2º conciliador sin consulta de asesor declaró, que el punto en cuestion era de derecho; y sin mas trámite ni dilacion, citó para sentencia,

la que le asesoró el ciudadano juez de 1ª instancia del Distrito de Almoloya.

El que habla, en vista de los precedentes que quedan establecidos creo, que la violación que los promoventes invocan del art. 14, es evidente; porque no hallándose el juez 2º conciliador autorizado por la ley de procedimientos del Estado de 11 de Julio de 1868, para negarles á los individuos representados por el Lic. Inclán, la representación en el juicio de que se trata, juzgándolos y sentenciándolos sin su audiencia, el procedimiento y sentencia es ilegal, pues nadie puede ser juzgado ni sentenciado, sino por leyes dadas con anterioridad al hecho y exactamente aplicadas á él.

Es incontestable que los quejosos, en la demanda que les puso el pueblo de San Mateo, no tienen carácter alguno de comunidad, porque son propietarios particulares cada uno de ellos en la fracción que se les adjudicó, procedente su título de la citada ley de 25 de Junio.

Es también fuera de duda, que quitándoles á esos adjudicatarios las fracciones que poseen, sin ser oídos y vencidos en juicio, se comete un verdadero despojo.

Por último, le parece al que lleva la voz, que la violación que se alega respecto del art. 16 es también clara y evidente; porque habiendo cesado el 29 de Mayo el impedimento que tuvo el juez 1º conciliador para conocer del negocio, conforme á la ley de 11 de Julio de procedimientos del Estado, el juez 2º conciliador debió pasar su conocimiento al juez 1º, y no habiéndolo hecho así, su incompetencia para sentenciar el juicio no es dudosa, por falta de jurisdicción.

Por lo expuesto, el que suscribe, con fundamento de los arts. 101 y 102 de la Constitución general, de la ley orgánica de estos, pide al juzgado, se sirva declarar que la Justicia de la Unión ampara y protege á todas y cada una de las personas que constan que confirieron su poder al C. Lic. Antonio Inclán y se hallan listadas en

el recaudo jurídico que corre al principio de los autos, contra el procedimiento y sentencia pronunciada en el juicio que sobre restitución de egido seguido á instancia del apoderado del pueblo de San Mateo contra el pueblo de San Lorenzo, por el C. José María Bermeo, juez 2º conciliador de esta ciudad, por cuya sentencia mandó, que los quejosos restituyesen á su primitivo estado los terrenos que gozan á título de propiedad.

Toluca, Setiembre 3 de 1875.—*Ceballos*.
—Una rúbrica.

Es copia que certifico, fielmente sacada de su original.—Toluca, Setiembre 17 de 1875.—*Raimon Ortigosa*.—*Vicente Landa*, secretario.

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Toluca, Setiembre 11 de 1875.

Visto en lo general este juicio de amparo, promovido por el C. Lic. Antonio Inclán, en legítima representación de los CC. José Crescencio, José Miguel, Saturnino Zarazar, Luis Bernardo, José María Nicolás, José Carlos, Ignacio Cristóbal, Felipe de Santiago, José Secundino, Ramón Antonio, Cosme Damian, Juan Doroteo, José Francisco, Pedro Nicolás, José Clemente 1º, Crescencio de la Cruz, José Cayetano, Carmen Camilo, Julian Luciano, José de los Santos, José Andrés, José Pascual, José Clemente 2º, Secundino Ireneo, José Victoriano, José Amado, Florentino de Jesus, José Miguel, José Apolinario, Andrés de Jesus, José Félix, Juan Bautista, Hilario Santos, José María Estevez, José Hilario, Felipe de Jesus, José Evaristo, Francisco Martínez, Pedro Nolasco, Lucas Evangelista, José Pablo, José Leocadio, Sebastián Fabian, Isidoro Bonifacio, Juan Rosales, José Antonio, Andrés Morales, José Adrian, Trinidad Gómez, Francisco Gómez, Grego-

rio Ponciano, José Mariano, José Victoriano, José de Santiago, José de Jesus, José Salvador, José Marcelino, José Silvestre, José María Loreto, Carmen Gómez, José Félix, José Hilario, Sebastian Fabian, Alejo Sandoval, Antonio Sierra, Pedro Pascual, José Lorenzo, Francisco Javier, Mauricio Luis, José del Carmen, José de Jesus, Antonio Romero, José Gregorio, Juan Bautista, Francisco Juan de Dios, Nicolás Obispo, Francisco de Paula, Ventura Cleto, José Guadalupe, Juan Evangelista, Filomeno Tranquilino, Agustín Isario, Miguel Asencio, José Apolonio, Alvino Lázaro, Casimiro Elcuterio, Florentino Epitacio, Domingo Bonitacio, José Agustín, Felipe Atanacio, José Pedro, José Irene, Vicente Ferrer, José Sebastian, José Pablo, Blas Villanueva, José Enrique, Pablo Antonio, Tomás 2º, José Mª Hipólito, José Epifanio, José Pascual, Francisco Rojas, José Roberto, José Cenobio, José Anselmo, José Procopio, Cayetano Lorenzo, Magdaleno de Jesus, Florentino de Jesus, Leandro Aparicio, José de los Angeles, Crescencio de Jesus, José Cristóbal, Juan Crisóstomo, Severino Antonio, José de Jesus, José Miguel, José Abundio, José Mateo, Sebastian Fabian, José Mariano, José de Santiago, Guadalupe Matías, José María, Tomás de Jesus, José Pioquinto, Juan Modesto, Bernabé Antonio, Dionisio Gómez, Juan Gómez, Pedro Gómez, José Anselmo, Andrés Eligio, Jacinto Macedonio, José Lorenzo, José Guadalupe, Leonardo Zacarías, Leandro Rodrigo, Cristóbal Santiago, José Laureano, José Gumecindo, Fermín Tranquilino, Patricio Esquivel, José Apolonio, Pastor Salvador, Marcelo Quirino, Lucas Evangelista, Vicente Ferrer, José Lucio, Andrés de Jesus, José Dionisio, José Urbano, José Pioquinto, José Inés, Francisco Ricardo, José Paulino, Urbano Martín, José de Jesus, José Trinidad, Manuel Ciriaco, Isidro del Espíritu Santo, Alejandro Víctor, Pedro Celestino, Juan Romualdo, José del Carmen, José M. Nicolás, Sebastian

Aparicio, Diego Martín, Tomás Mateo, Hilario Santos, Martín Diego, Laureano Irene, Damian Cipriano, José Joaquín, José Valentín, Antonio Reyes, Apolonio Petronilo, José Macedonio, Manuel Eutimio, José de Santiago, José de Santiago 2º, José Fernández, Bartolo de Jesus, José Ildefonso, José Cástulo, José Lorenzo, Miguel Gerónimo, Jesus Perfecto, José Matías, José Bernardino, José Benito, Cristóbal Bermudez, Nestor Albino, Juan Esteban, José Nicanor, Julio Domingo, José Leonardo, Marcos Cleto, José Nicanor, José Hilario, Joaquín Fernando, José Valentín, José Toribio, Pedro Ángel, José Leocadio, José Eligio, José Longinos, Anastasio Catarino, Felipe Máximo, José Gabriel, José Sixto, Atanasio de la Cruz, José Encarnación, José María, Juan Félix, Susano Bernal, Francisco Martínez, José Anselmo, José Procopio, Nicolás Morales, Candelario de Jesus, Tomás S. Bernal, Pedro Catarino, Cosme Damian, Pablo Sixto, José Luciano, José Zeferino, Nicolás Macedonio, Francisco Javier, Ramon de los Santos, José Luis, Laureano Irene, Máximo de Jesus, Juan Agustín, Juan Crisóstomo, Quirino Bermudez, Florencio Bermudez, Andrés Saturnino, Ignacio Santos, Bernardino Valente, Francisco Cornelio, José Dimas, Florencio de Jesus, Gerónimo Remigio, Antonio Sóstenes, José de Jesus, Ventura del Carmen, José de Jesus, José Gregorio, José Reyes, Aparicio Guadalupe, Juan Bautista, José Reyes, Gaspar de Jesus, José Marcos, Teodoro de los Santos, Mariano Dionisio, Gil Antonio, Julian Teófilo, Florencio Matías, Francisco Rosario, José Guadalupe, Anastasio Toribio, Rafael Rosales, Dolores Hernández, José Longinos, Manuel Basilio, Luis Gonzaga, José Apolinario, José de Jesus, José Agustín, José Valentín, José Simón, Joaquín Carmona, Cayetano Roman, José Plácido, José Eduwigis, Manuel de Jesus y María Petra, Joaquina Sierra, Paula Timotea y María Cleto: y seguido también en representación de los CC. Jesus Rosales, Hipólito

de Jesus, y Vicente de Jesus, todos originarios y vecinos de San Lorenzo Tepaltitlan, cuyos tres últimos lo habian promovido por sí. Visto así mismo, y especialmente, el ocurso de 5 de Agosto último, así como el de 4 del citado mes, en los que los promoventes solicitan que la justicia de la Union los ampare y proteja contra la sentencia pronunciada en tres de Julio tambien último, por el ciudadano juez 2º conciliador de esta ciudad, así como contra los procedimientos que tuvieron lugar en el juicio sobre restitucion del llano de San Lorenzo, por cuanto que, el citado ciudadano juez, violó en sus personas las garantías que al hombre otorga la Constitucion general de la República, en sus arts. 14 y 16: y visto por último, el informe justificado de la autoridad designada como responsable del acto reclamado, lo pedido por el ciudadano promotor fiscal de hacienda y el resultado de la prueba aducida por los peticionarios.

Teniendo en consideracion, primero: que los art. 101 y 102 del pacto federal, imponen la obligacion á los tribunales de la federacion, de resolver las controversias que se susciten por leyes ó actos de cualquiera autoridad que violen las garantías individuales, protegiendo y amparando á los quejosos, cuando proceda de justicia, en el caso especial sobre que verse la queja.

Segundo: que los art. 14 y 16 ya citados, conceden las garantías, el uno, de que nadie pueda ser juzgado ni sentenciado sino por leyes dadas con anterioridad al hecho, y exactamente aplicadas á él por el tribunal que previamente haya establecido la ley, de cuyas diversas partes se deduce con naturalidad, ora que, no por que las leyes hayan sido dadas con anterioridad y exactamente aplicadas al caso, deja de violarse la garantía; si el tribunal no estuvo previamente establecido por la ley, y ora que tampoco deja de violarse, si aunque el tribunal haya sido establecido previamente, la ley no fué publicada con anterior-

idad al hecho sobre el que se juzga, ó del que se conoce, ni aplicada exactamente á él; y el otro, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles y posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

Tercero: que esto supuesto, y supuestas tambien las constancias de autos seguidos ante el mencionado ciudadano Juez 2º conciliador de esta ciudad, es flagrante la violacion de las garantías aseguradas por el art. 14 y el 16, toda vez que, cuando la autoridad responsable siguió el juicio y aun falló lo que creyó justo sin oír para nada á los verdaderamente demandados, que no fueron ni pudieron ser otros que los poseedores de las fracciones en que el terreno se dividió entre los vecinos del pueblo de San Lorenzo Tepaltitlan, y cuando lo verificó sin la precisa é indispensable competencia, es fuera de toda duda que se violaron dichas garantías, sin que pueda siquiera vacilarse sobre si este concepto es inexacto, por que es de toda evidencia, que el poder del representante de San Mateo Otzacatipan, fué dado al C. Hilario García por los auxiliares de dicho pueblo, á la vez que al auxiliar de San Lorenzo, por razon de tal, se le negó la personalidad; que recibida la demanda, se llamó al individuo que se juzgó como el representante natural del pueblo, para los negocios de comun, y nunca jamás para los juicios en que se versan las propiedades de los particulares; verdad reconocida por el Juez, su asesor y la parte actora, esto es, el auxiliar: que las fracciones del terreno, no habian sido vendidas á los particulares por el comun, sino adquiridas mediante la ley y la autoridad; circunstancia que se confesó é hizo notar por aquellas: que ademas, y aun suponiendo legal el paso de entenderse con el comun; que ni poseía, ni habia enagenado la cosa, ni representa á los particulares en lo que estos posean individualmente, ni aun en lo que

disfruten formando una extensa compañía, no se le concedió al auxiliar siquiera un corto tiempo para que se proveyese de personero, como era de justicia, supuesto que las dificultades que habia que superar, venian de la ley y no del reo: en cuya virtud procedia la concesion de una espera, sino que se llamó al síndico, el cual, si alguna vez y en ciertos casos tiene alguna representacion legal, es solo por el comun y no por los particulares, á quienes en buen derecho, jamás puede obligarse á que sean representados por persona que ellos no nombren espontaneamente, sin que hubiesen sido bastantes á impedirlo, las gestiones en contrario de los poseedores de los lotes en que el terreno se dividió; pues antes bien, ó insistiendo en la idea de entenderse con el comun, se hizo alguna notificacion al C. Lic. Manuel Reyes, á quien el comun quizo dar poder; en cuyo caso no se juzgó con sujecion á las leyes dadas con anterioridad al caso, las cuales previenen que el juicio se siga con audiencia del demandado, que no es otro que aquel que se designa en la demanda y que se pretende desaparecer de la cosa reclamada, sino con sujecion á otras, que si existen y privan de la audiencia al demandado, aun contra el derecho natural, ni son conocidas, ni se han publicado con anterioridad al caso; que la competencia del juzgado 2º conciliador para conocer como Juez en 1ª instancia, del juicio que motiva este amparo, surgió de un hecho, sin el que no habia llegado á sus manos la demanda; esto es, emanó de la circunstancia de estar impedido el ciudadano Juez 1º conciliador, porque á la sazón despachaba el juzgado del ramo criminal; ó lo que es igual, de esa circunstancia nació su competencia, como nace la representacion del poder habiente, de la circunstancia de existir el poderdante y conferir su poder, debiendo cesar en consecuencia el Juez 2º conciliador, luego que desapareció el impedimento, como en el ejemplo propuesto cesa ó concluye la personería del

representante, luego que fallece el representado, en cuyo caso, y suponiendo legítimos los actos anteriores al 29 de Mayo del corriente año, faltó la competencia en lo sucesivo, debiendo desde entonces consignarse los autos al primer conciliador, único competente por solo el tiempo que despachase el juzgado de lo civil la autoridad que se habia escusado; pues al Juez toca cuidar de su competencia ante todas cosas, máxime cuando no tiene mas facultades que las que expresamente le conceden las leyes; y cuando por mas legal que se considere la próroga de jurisdicción, nunca un conciliador puede ejercer la jurisdiccion del Juez de 1ª instancia, por solo que las partes, ni mucho menos una sola de ellas, lo invistan de las facultades necesarias, en cuya virtud, cuando menos desde 29 de Mayo citado, si no es que aun antes, pues no consta la excusa del primer conciliador, se causaron las molestias sin la competencia necesaria: lo alegado por las partes, con todo lo demas que considerar y ver convino: la Justicia de la Union, con fundamento del art. 101 de la Constitucion de la República, y con apoyo así mismo de la ley de 20 de Enero de 1869, declara: que debía amparar y desde luego ampara y protege, á los representados por el C. Lic. Antonio Inclán mencionados al principio, contra la sentencia pronunciada por el ciudadano juez 2º conciliador de esta ciudad, pronunciada el día 8 de Julio último, y procedimientos que la precedieron. Hágase saber, espúlanse las copias para su publicación por los periódicos de costumbre y Semanario Judicial, y fecho, remítase este juicio á la Corte Suprema de Justicia para su revision. El C. Lic. Ramon Ortigosa, juez de distrito en el Estado de México, así definitivamente juzgando, lo decretó y firmó. Doy fé.—*Ramon Ortigosa.*—*Vicente Landa*, secretario.

Es copia que certifico, fielmente sacada de su original.

Toluca. Setiembre 17 de 1875.—*Ramon Ortigosa.*—*Vicente Landa*, secretario.

*Ejecutoria de la Suprema Corte
de Justicia.*

México, Octubre 13 de 1875.—Visto el juicio de amparo promovido por el C. Lic. Antonio Inclan, en representación de los ciudadanos (aquí se citan los nombres expresados en la sentencia anterior) vecinos del pueblo de San Lorenzo Tepaltitlán, de la municipalidad de Toluca, ante el Juzgado de Distrito del Estado de México, contra la sentencia pronunciada por el Juez 2º Conciliador de dicha Ciudad, así como contra los procedimientos que tuvieron lugar en el juicio que les promovió el pueblo de San Mateo Otzacatipan, sobre restitución del llano de San Lorenzo, que les había sido adjudicado con arreglo á las leyes, juzgando que con dichos procedimientos y sentencia, se violan las garantías que otorga la Carta fundamental en sus arts. 14 y 16.

Visto el informe de la autoridad responsable del acto reclamado; la prueba rendida por los quejosos; el pedimento del ciudadano promotor fiscal, y todo lo demas que de autos consta y se tuvo presente, se declara: que es de confirmarse y se confirma por los propios legales fundamentos, la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito del Estado de México en 11 de Setiembre último, que declaró: que la Justicia de la Union ampara y protege á los quejosos contra la sentencia pronunciada por el Juez 2º conciliador de Toluca en 3 de Junio del presente año y procedimientos que lo precedieron.

Devuelvânse las actuaciones al Juzgado de su origen con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes. Hágase saber, publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal Pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—Presidente, José Arteaga.—Ignacio M. Altamirano.—M. Auza.—Ignacio Ramírez.—E. Montes.—

J. M. Vigil.—H. Surovil.—S. Guzmán.—L. Velazquez.—H. Savala.—José García Ramírez.—Manuel Alas.—Enrique Landa, secretario.

Es copia que certifico. México, Enero 8 de 1876.—Enrique Landa, oficial mayor.

AMPARO.

Promovido ante el juzgado de Distrito de Puebla por el C. Lic. Joaquín Ruiz, contra los procedimientos de la jefatura superior de Hacienda en el Estado, que, usando de la facultad económico coactiva, ha embargado una casa de la propiedad de los quejosos.

SENTENCIA DEL C. JUEZ DE DISTRITO.

Puebla, 24 de Agosto de 1875.

Visto el presente juicio de amparo promovido por el C. Lic. Joaquín Ruiz contra la jefatura de hacienda de este Estado, por el embargo que decretó y ejecutó respecto de la casa núm. 18 de la calle de la Compañía: visto el escrito de queja con los testimonios que se adjuntaron; el informe de la autoridad responsable; el parecer fiscal; las pruebas rendidas; lo alegado; y cuanto ha debido tenerse presente y verconvino.

Considerando: que aunque la jefatura de hacienda procedió al secuestro de la finca que se dice reconoce al erario federal el capital de cinco mil seiscientos setenta y seis pesos sesenta y seis centavos, por orden de la tesorería general de la Nación, no debió sin embargo, haber usado de la facultad económico coactiva, supuesto que no se trataba de un derecho claro e indudable á favor de la hacienda pública, atenta la oposición del promovente, fundada en la cancelación de la escritura respectiva.

Considerando: que desde el momento que el propietario C. Lic. Joaquín Ruiz;